

## **Imprimir**

Cuando se conformaron los primeros núcleos guerrilleros del Ejército Popular de Liberación a principios de la década de los 80 en la región del Catatumbo, el padre Manuel Pérez Martínez comandante general del ELN ya oficiaba misas, bautizaba niños y celebraba matrimonios de los campesinos que habitaban los municipios de El Carmen, Teorama y Hacarí; a su vez Carlos Armando Cacua Guerrero se dedicaba a organizar las bases de apoyo campesino.

En adelante los dirigentes del PCC-ML y del EPL, aprenderían del ejemplo eleno, que la construcción del frente guerrillero, pasaba necesariamente por apoyar a la comunidad no solo en sus labores cotidianas de abrir caminos y construir carreteables, sino ante todo a respetarla.

En ese momento no existían manuales para relacionarse con las comunidades. Tampoco distribución del territorio. Mucho menos pactos para generar recursos financieros a las organizaciones. Se entendía que su razón de ser y de existir, eran esos campesinos pobres, sumidos en el abandono gubernamental y la miseria, que habían jurado defender a costa de su propia vida.

La lucha diaria forjó lazos de unidad tan fuertes que además de andar por los mismos caminos, llegaron a compartir campamentos, medicinas, comida y trincheras. Un guerrillero caído en combate era una tragedia para ambas organizaciones. Más tarde llegaron juntos a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. A pesar de la negativa elena de avanzar en un proceso de diálogo con el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur, hubo respeto y aprendizajes comunes e impulsaron diversas iniciativas de apoyo al trabajo popular.



Al momento del desarme del EPL en marzo de 1991, el ELN brindó apoyo político y militar a un grupo aproximado de 30 jóvenes que decidieron abandonar el campamento de paz ubicado en el Corregimiento de Campo Giles, municipio de Tibú, para continuar la lucha armada. Sin cuadros políticos y con escasa experiencia militar, inician un proceso de reorganización de su partido y de su brazo armado en la región del Catatumbo y en el Sur del departamento del Cesar y Santander, con los frentes guerrilleros Libardo Mora Toro y Ramón Gilberto Barbosa Zambrano respectivamente.

A pesar de la desconfianza de las FARC, los guerrilleros del EPL lograron mantenerse en algunas zonas del Catatumbo siempre bajo el amparo del ELN y con el apoyo de una base social que una década atrás había visto como se conformaba y desarrollaba una guerrilla surgida de la nada, en condiciones de extrema precariedad.

Cosa distinta ocurrió con la fuerza guerrillera ubicada en el departamento del Cesar, que pocos años después de su conformación fue desmantelada en su totalidad. Sus miembros en su mayoría fueron muertos, algunos desparecidos y otros detenidos, en el marco del desarrollo de un gigantesco operativo militar dirigido personalmente por el General Martín Orlando Carreño desde la V Brigada del Ejército Nacional, con sede en la ciudad de Bucaramanga.

Para mediados de los 90, la región del Catatumbo comienza a vivir una bonanza cocalera, que lo deformó todo. El crecimiento desbordado de los cultivos de hoja de coca, transformó no solo la vida y la cotidianidad de sus habitantes, sino también la de las guerrillas que hacían presencia en el territorio.



Este fenómeno ilegal trajo como consecuencia la presencia de narcos de todo el país, atraídos principalmente por la cercanía de la frontera venezolana y la posibilidad de utilizar esta ruta para la salida de la cocaína hacia los mercados internacionales. Más tarde en mayo de 1999, en una acción coordinada desde el alto mando militar colombiano, se presenta la incursión paramilitar en la región, que dejó a miles de personas asesinadas, desterradas y desaparecidas.

A esta alturas las guerrillas habían alcanzado un importante grado de organización y aprovechamiento del negocio de la coca. Unos más que otros. Algunos de manera soterrada y otros abiertamente. Pero en general, ya no eran aquellas mismas organizaciones que dependían de la producción campesina para sostenerse. Ahora estaban en manos de una actividad con una multiplicidad de actores e intereses, que podía generar ingresos multimillonarios, además de "ganar" nuevos aliados desde miembros del establecimiento colombiano, pasando por narcos puros, paramilitares y gente del común, que deseaba enriquecerse rápidamente, lo que llevaba necesariamente a relacionarse con unos y otros.

Las FARC con mayor experiencia en esta actividad, canaliza la mayor parte del negocio sin mayores inconvenientes. Más tarde el ELN toma la decisión y hace lo propio. Pero quien presenta los mayores inconvenientes durante este proceso es el EPL, que además determina ampliar los cultivos de hoja de coca en una región determinada como retaguardia estratégica para las insurgencias.

A pesar de las diferencias con el ELN y los primeros enfrentamientos sostenidos con las FARC, el EPL de la mano del auge cocalero, logra rápidamente el dominio territorial y control sobre una actividad con enormes complejidades sociales, económicas y criminales, que sorprende a algunos mandos con escasa formación política, quienes asumen



comportamientos y prácticas mafiosas, a cambio de la obtención de altísimos ingresos de dinero efectivo, que permitieron no solo el sostenimiento del proyecto guerrillero local sino su expansión a otras regiones de Colombia.

Esta situación le permite al Estado colombiano sacar ventaja, desarrollando una arremetida política y militar en Norte de Santander, desplegando operaciones militares permanentes a gran escala y algunas más especializadas dirigidas a golpear estructuras, bases de apoyo social y comandantes, dejando al final a sus dirigentes guerrilleros muertos y a otros detenidos, que lleva nuevamente al EPL a una situación de extrema vulnerabilidad en su conducción política y militar.

Al tiempo, las FARC toman la decisión de avanzar en su proceso de desarme, logrando un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Lo que trae como consecuencia su salida de los territorios bajo su dominio militar.

Esta decisión no solo saca del escenario de la guerra a la más importante y poderosa organización guerrillera de Colombia, sino que abre nuevas expectativas de dominio territorial y de control sobre el negocio del narcotráfico, que dicho sea de paso, presenta en esos momentos otras características, con el aumento de cultivos de hoja de coca y la presencia nuevamente en el territorio de compradores mexicanos.

La escasa y lenta respuesta de las autoridades colombianas, lleva a que estos territorios desocupados militarmente por las FARC sean rápidamente copados por estructuras del ELN y del EPL, generando en un primer momento diferencias en la forma de intervenir estos



territorios, el trato hacia las comunidades y el respeto hacia los procesos sociales. Así mismo disputas abiertas acerca de quien debe quedarse allí; lo que termina más tarde en incidentes entre unidades guerrilleras y ataques a través de pronunciamientos públicos.

Es de anotar que además de estas diferencias políticas, también existen grandes intereses económicos por alcanzar el dominio sobre algunos sectores de la frontera con Venezuela, estratégicos no sólo para el manejo del negocio del narcotráfico sino también para el desarrollo de futuras operaciones guerrilleras.

En las últimas semanas ocurrieron algunos hechos que desencadenaron la decisión de declararse abiertamente en guerra a muerte, como el ataque realizado por unidades el ELN a una embarcación que transportaba a miembros de la comunidad Barí, asentados en territorio venezolano o la detención realizada por guerrilleros del EPL a una comisión del ELN, que más tarde fueron entregados desarmados a la comunidad como garantes de vida.

Sorprende como una alianza construida por más de 30 años, haya tomado niveles de violencia atroz y sevicia en los ataques que mutuamente han realizado. A pesar de las múltiples versiones y las dificultades enormes para verificar la información, al parecer las cifras de muertes se acercan a 24. Las comunidades que habitan estos territorios, han tenido que trasladarse para salvaguardar su vida y los riesgos de desplazamientos masivos son enormes.

Distintos sectores del departamento Norte de Santander, han hecho públicos sus llamados al diálogo, a la cordura y a la sensatez. También al respeto a los derechos de la población no



combatiente y acatamiento del Derecho Internacional Humanitario. Mientras tanto los cultivos de hoja de coca continúan creciendo, los niveles de pobreza y miseria permanecen inalterables. Los compradores no son narcos locales tratando de enriquecerse rápidamente, sino del cartel de Sinaloa. Hay más militares. Más policías. Las carreteras siguen igual. Los médicos no aparecen. El Estado continúa ausente. Los jóvenes carecen de oportunidades.... Así las cosas, el ELN y EPL en un acto demencial, deciden iniciar una nueva guerra en la región.

WILFREDO CAÑIZARES ARÉVALO

Defensor de Derechos Humanos

Director Fundación Progresar

@wilcan91